



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 25
MAYO 2024

Contenido

TEMA DEL MES: CLAVES PARA DESCIFRAR LA CUENTA PÚBLICA	3
CHILE BAJO LA LUPA: LAS PROPUESTAS CONTRACULTURALES DE LA COALICIÓN DE GOBIERNO	5
ALERTA CONCEPTUAL: WOKE.....	7

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

CLAVES PARA DESCIFRAR LA CUENTA PÚBLICA

El próximo 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric enfrentará su tercera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno. El mandatario llega a esta instancia en un escenario distinto a los anteriores. Por primera vez desde que asumió el Ejecutivo, el nivel de aprobación presidencial se sitúa por debajo de la barrera del 30%. Este tercio del electorado, su línea base de apoyo, compuesta mayoritariamente por jóvenes identificados ideológicamente con la izquierda que se había mostrado inquebrantablemente fiel a Boric, ha comenzado a dar los primeros signos de agrietamiento.

De ahí que la Cuenta Pública sea un hito fundamental para visualizar y proyectar cuál será el tono que primará en el último tramo de la administración Boric. Esta instancia, a su vez, permitirá observar cómo desde el Gobierno se administra la tensión entre moderación y radicalización, gestión y testimonio, y presente y futuro.

Toda Cuenta Pública intenta trazar un horizonte de sentido, en el que probablemente el Presidente insista en rescatar algunos elementos centrales de su programa de Gobierno. Este programa se vio desdibujado por las condiciones electorales que alteraron el derrotero de la política nacional tras el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. El Ejecutivo, comprometido con el proyecto de Constitución maximalista y refundacional propuesto por la Convención, supeditó la puesta en marcha de su programa a una eventual aprobación de este texto, escenario que evidentemente fracasó, al imponerse la opción Rechazo por un 62%. Quedando los aspectos medulares de su programa en una situación de desfase respecto del cambio en el clima de opinión pública, que dejó de ser funcional a las reformas del Gobierno. A modo de ejemplo, durante esa campaña electoral plebiscitaria, se afianzó la conciencia ciudadana respecto de temáticas como la defensa de la capitalización individual en el sistema previsional, que está en las antípodas de la reforma de pensiones que esta administración anhela.

Pese a aquello, es altamente probable que, por una natural disposición ideológica de esta generación, el Presidente insista en darle realce a algunas de estas reformas, como la propia previsional, el denominado Pacto Fiscal o la condonación del CAE, pero incorporando además, por necesidad más que por genuina convicción, ambiciosas propuestas -aunque no por eso deficientes o insuficientes- en materia de seguridad, como el proyecto de reforma al sistema de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza en el control del orden y la seguridad pública (RUF), y el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

El problema en este sentido es que el Gobierno no cuenta con mayoría legislativa, pero tampoco ha mostrado una real apertura a flexibilizar sus posiciones para consensuar modificaciones a estas iniciativas, en aras de avanzar hacia la consecución de acuerdos. De ahí que la ventana de oportunidad de esta administración para concretar sus proyectos en sede legislativa sea cada vez más estrecha y, por ende, todo anuncio en esta dirección debiera leerse más como una señal discursiva que como un norte o destino real de política pública.

Otro camino que el Presidente podría explorar es afianzar la vía administrativa como forma de avanzar en el cumplimiento de metas de Gobierno. En este ámbito, el problema del Ejecutivo son sus carencias objetivas a nivel de gestión, aspecto fundamental para dar respuesta a problemas concretos de la ciudadanía como las listas de espera en el sistema de salud público, la ausencia de matrículas en la

educación escolar, el déficit habitacional y la reconstrucción de zonas damnificadas por el mega incendio en Viña del Mar, entre otros.

Frente a esta disyuntiva, el Presidente intentará hacer un rescate de hitos legislativos y de gestión que buscará incorporar como parte de su legado, en especial aquellos relativos a la agenda de seguridad, donde si bien se han logrado aprobar una alta cantidad de iniciativas, la mayor parte de estas corresponden a mensajes presidenciales de la anterior administración y que contaron con una férrea oposición de los actuales cuadros gubernamentales cuando desempeñaban funciones como parlamentarios. Se añade a lo anterior que esta nutrida agenda denominada “*fast track*” de seguridad ha logrado ser despachada porque es la oposición quien ha concurrido con sus votos, a pesar de la resistencia del bloque más izquierdista del propio oficialismo. En ese sentido, la conducta de la oposición ha estado muy lejos del obstruccionismo. Otra línea potencial del discurso pasará por dar realce a la cuantiosa inversión de recursos en materia de seguridad, pese a que ésta ha contado con algunos déficits a nivel de ejecución presupuestaria. Lo cierto es que los recursos son condición necesaria, pero no suficiente, para abordar la severa crisis en esta materia. Al respecto, basta ver las cifras: durante estos últimos dos años, Chile ha alcanzado el número más alto de homicidios y delitos violentos.

En el ámbito económico, la situación está lejos de ser idónea y hay poco en materia de gestión gubernamental por destacar. En términos del mercado del trabajo, las principales leyes que el Gobierno ha aprobado durante su mandato son la reducción de la jornada laboral a 40 horas -ya en implementación- y el aumento del sueldo mínimo a \$500 mil -que comienza en julio-. Ambos cambios generarán un alza en la contratación de trabajadores formales, haciendo aún más difícil la recuperación de las tasas de ocupación que aún están por debajo de las que presentaba el país antes de la pandemia. Al analizar diferentes indicadores del mercado del trabajo, vemos que ha habido un descenso en las ofertas laborales, un aumento en los despidos y un menor dinamismo en la creación de empleos formales. Todo ello ha redundado en un mayor porcentaje de personas que buscan, pero no encuentran trabajo. Así, los supuestos beneficios aprobados por el Presidente Boric llegan a menos personas y harán más difícil que las familias puedan progresar en base a su propio esfuerzo al no poder emplearse.

Por otro lado, otro ámbito que el Presidente intentará destacar será el fin del copago para los tramos C y D de FONASA, que actualmente pagaban un 10% y 20% del costo, respectivamente, de las prestaciones que recibían en los hospitales estatales. Esto comenzó a operar en septiembre de 2022 y, si bien parece un gran beneficio para 4 de cada 10 afiliados al seguro estatal que pertenecen a dichos tramos, ignora que el problema de FONASA, más que el cobro, es la disponibilidad de la atención.

De hecho, a fines del año pasado, 68 mil chilenos esperaban por una prestación médica cuya oportunidad se suponía garantizada gracias al GES. En el caso de las intervenciones quirúrgicas que no son parte de dicho plan, las listas de espera superan las 295 mil personas. Y en las consultas médicas, las listas acumulan más de 2 millones de personas. Así, las listas de espera subieron en un 9% entre 2022 y 2023. Y como recientemente se ha dado a conocer, inclusive se ha producido una escandalosa e inédita situación en la que se borraron nombres de personas de listas de espera en hospitales públicos. No es de extrañar entonces que, pese a los copagos requeridos, el año pasado se hayan realizado 74 millones de prestaciones en la modalidad de libre elección (que permite a los afiliados de FONASA atenderse en el sector privado), evitando así esperas excesivas.

Así las cosas, el Presidente enfrentará una Cuenta Pública con signos de una incipiente oposición interna a su bloque de respaldo político, poniendo énfasis en áreas de gestión que no son propias de su línea de pensamiento y relevando aspectos de políticas implementadas durante su administración con escaso impacto real en la situación económica y social del país.

CHILE BAJO LA LUPA

LAS PROPUESTAS CONTRACULTURALES DE LA COALICIÓN DE GOBIERNO

La posición en la que se encuentra hoy el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con bajas cifras de apoyo y con dificultad de poder tramitar sus reformas claves en el Congreso, no debiese sorprendernos. Lo anterior, por una razón muy concreta y es que el proyecto político que encarna el Gobierno se ha traducido en propuestas que no se alinean con los valores y posiciones de los chilenos.

Revisando los distintos programas de gobierno elaborados por el entonces candidato Boric (primarias, primera y segunda vuelta presidencial), observamos que esta desconexión se produce desde la génesis de lo que fue la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista (a la que posteriormente se sumaron las fuerzas de la ex Concertación).

De esta forma, podemos ver, por ejemplo, que en estos documentos se planteaba terminar con el sistema de AFP y reemplazarlo por un nuevo sistema administrado por un ente público, además de proponer que parte importante del 6% adicional de cotización deba ir a un componente de reparto. A este respecto, una encuesta realizada por Critería en el pasado mes de abril señaló como más de un 80% de los chilenos defiende principios tales como que los fondos de pensiones sean heredables (89%), que las cotizaciones sean de propiedad de los trabajadores y vayan completas a su cuenta individual (84%) y que, en caso de crearse nuevas entidades previsionales, los afiliados puedan optar a seguir en su actual AFP (84%). Además, un 66% responde que prefiere que todo el 6% adicional de cotización vaya a sus cuentas individuales.

En el ámbito de la salud, podemos encontrar en los programas de la actual coalición de Gobierno una intención explícita de avanzar hacia un sistema universal en que todas las personas quedarían afiliadas a Fonasa, transformando a las Isapres en seguros complementarios voluntarios. En esta línea, la encuesta Cadem de la 2da semana de mayo reveló que un 77% de la ciudadanía considera que el sistema de salud debe ser mixto, para que todos puedan elegir libremente pertenecer a una institución pública o privada. Asimismo, un 77% de los usuarios de Isapre estaría de acuerdo con la idea de aprobar una ley que cree las condiciones para que estas puedan seguir operando.

Por otro lado, en cuanto a seguridad, quienes hoy dirigen el Ejecutivo levantaron como una de sus principales banderas durante la campaña del año 2021 el refundar a las policías, es decir, crear nuevas instituciones que replacen a las actuales. Adicionalmente, apuntaron a poner fin a la estructura militarizada de Carabineros, detener la *“creciente militarización del orden Público”* y restringir la justicia militar.

La crisis de seguridad que atraviesa el país por sí sola podría ser argumento suficiente para demostrar lo desacopladas que se encuentran estas propuestas de la realidad. No obstante, encuestas recientes entregan aún más antecedentes en esta línea desde la perspectiva de la percepción ciudadana. En primer lugar, según la encuesta Cadem de la cuarta semana de abril, Carabineros y la PDI alcanzan niveles de aprobación del 84% y 85% respectivamente, alzándose como las instituciones con mejor evaluación en el país, solo superadas por Bomberos. Sumado a esto, según el mismo estudio de la primera semana de mayo, un 89% de los chilenos considera que Carabineros debiese contar con fuero y protección especial al enfrentarse al crimen organizado, un 88% cree que las FF.AA. deberían poder

colaborar en tareas de seguridad ciudadana y un 59% considera que se debe devolver a tribunales militares la competencia de juzgar a militares o carabineros cuando haya víctimas civiles.

Por último, para el caso de la migración, en los mencionados programas de gobierno se establece como principio que este es *“un fenómeno constitutivo de nuestra sociedad y la asumimos como parte de nuestro proceso histórico”*. Además, en estos documentos se promovían ideas como el empadronamiento de quienes hayan ingresado clandestinamente al país para evaluar su situación, una política que efectivamente desarrollaron a fines del año pasado levantando la sospecha de ser una regularización encubierta.

Sin embargo, el mayor acto desconexión con la realidad de lo que se vive en Chile respecto a este tema, fue el requerimiento levantado en diciembre del 2020 ante el Tribunal Constitucional para suprimir varios artículos de la Ley de Migración y Extranjería que se tramitaba en ese entonces. Este recurso, del cual fueron autores varios parlamentarios que ocuparon u ocupan importantes cargos en el Gobierno, entre ellos el propio Presidente Boric, intentó eliminar del proyecto el inciso primero del artículo 131, que permite a las autoridades expulsar, en el más breve plazo, a los extranjeros que ingresen al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional.

Afortunadamente la eliminación del mencionado inciso no fue acogida por el tribunal y la Ley vigente otorga al Estado esta herramienta para llevar adelante expulsiones bajo el mencionado criterio. Algo fundamental en virtud de una crisis que ha aumentado y que ha generado un profundo impacto en la opinión pública. En este sentido, la Encuesta Bicentenario UC 2023 dio a conocer que un 86% de la población considera que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva, así como un 91% cree que el aumento de personas migrantes en Chile ha tenido efecto en el aumento de la delincuencia y prácticamente la mitad de los ciudadanos (47%) opina que el creciente número de migrantes hace de Chile un peor lugar para vivir.

En concreto, la revisión de los programas de gobierno del hoy Presidente Boric, contrastados con las cifras de opinión pública, revela que aquella izquierda que llegó al poder hace más de dos años ha sostenido, desde sus orígenes, propuestas que son contraculturales a los valores de la sociedad chilena. Algo que quedó completamente demostrado con la contundente victoria del Rechazo en el plebiscito de salida del año 2022.

Lo anterior da para pensar que la victoria que obtuvieron en las urnas el 2021 obedeció más que nada a un momento circunstancial, lo cual explicaría la razón de por qué el Gobierno no ha tenido el apoyo y la fuerza suficiente para llevar adelante sus reformas.

La pregunta que quedaría por responder es si el Gobierno será capaz de darse cuenta de esta contradicción y se enfoque en lo que le queda de mandato, en una gestión que apunte a resolver los innumerables problemas del país. Por último, cabe preguntarse también si es que a futuro quienes encarnan el proyecto político generacional de esta nueva izquierda serán capaces de abandonar sus pretensiones refundacionales o acaso volverán a tener el mismo comportamiento cuando vuelvan a ubicarse en la oposición.

ALERTA CONCEPTUAL WOKE

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo el término *woke* se ha tomado el debate público, a raíz de la participación de José Antonio Kast en un foro en Hungría, donde señaló que en Chile “estamos gobernados por un presidente *woke*”¹.

El concepto sociopolítico *woke* ha evolucionado de forma significativa en los últimos cien años. Tiene sus orígenes en la cultura afroamericana y se refiere a una forma aguda de conciencia social y política, particularmente asociada a las injusticias raciales. Esta categoría conceptual se puede rastrear a principios del siglo XX, cuando se empleaba para describir a alguien que estaba alerta y consciente de las injusticias raciales y sociales (Bunyasi & Smith, 2019). A mediados del siglo XX, el término aparece en la música y literatura afroamericana, donde “*stay woke*” se utilizaba como un llamado a mantenerse alerta frente a las injusticias derivadas de la discriminación racial².

En la década de 2010, *woke* resurge con fuerza en el contexto de movimientos sociales contemporáneos en Estados Unidos, especialmente a través del movimiento *Black Lives Matter*, que surgió en respuesta a los casos de uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y otras formas de violencia contra la población afroamericana³. En este contexto, ser *woke* implica una conciencia crítica y un compromiso activo con la lucha contra las injusticias sociales.

El término ha mutado para incluir una mayor conciencia sobre diversas formas de discriminación, expandiéndose a una multiplicidad de grupos, incluyendo aquellos basados en género, diversidad sexual, corporalidad, raza y etnicidad, y otras dimensiones de opresión. Sin embargo, esta expansión también ha generado debates y controversias sobre el uso y la apropiación del término en diversos contextos, llegando a ser, hoy en día, una ofensa utilizada frecuentemente en debates políticos en todo el mundo⁴.

Paradójicamente, las mayores críticas al concepto y a sus formas de expresión han provenido del ámbito filosófico y teórico de la izquierda. Este sector ha reaccionado de manera crítica al movimiento *woke*, acusándolo de ser tribal y de promover un individualismo identitario ingenuo, con fuertes componentes de narcisismo⁵. Esto puede resultar confuso para muchos, ya que el movimiento *woke* tiene sus orígenes en valores compartidos por los movimientos clásicos de izquierda. Sin embargo, estos orígenes se ven truncados por una serie de supuestos teóricos que terminan por socavar los valores de la izquierda tradicional. Por ejemplo, la izquierda tradicional lucha por una visión de justicia social basada en el igualitarismo, buscando la universalidad de derechos, entre otros, como la educación y la salud. En contraste, la izquierda *woke* promueve una lucha social centrada en las identidades de ciertas comunidades, buscando favorecer grupos particulares y, a menudo, siendo indiferente a la situación de otros grupos de la sociedad.

¹ La Tercera. Disponible en: <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/que-significa-woke-el-polemico-termino-que-uso-kast-para-referirse-al-presidente-boric/OBPSL3C3XRH27K36GSNFJIQKGQ/>

² Crockett, D. (2020). “Stay Woke”: Discourse, Ideology, and the Struggle for Black Freedom. Oxford University Press.

³ Rickford, R. (2016). Black Lives Matter: Toward a Modern Practice of Mass Struggle. *New Labor Forum*, 25(1), 34-42.

⁴ Neiman, S. (2024) Izquierda no es *woke*. Editorial Debate.

⁵ Ídem.

Otro punto a considerar es la noción de justicia en la izquierda *woke*, la cual está íntimamente relacionada al poder. Siguiendo la influencia de autores como Foucault, la justicia, en términos institucionales, es vista como la sedimentación de un discurso impuesto por un grupo dominante⁶. De esta forma, lo *woke* desconfía de las instituciones que ejercen justicia en un Estado, generando prácticas donde el castigo es ejercido por los propios grupos. Las “funas” o cancelaciones en redes sociales serían una manifestación de cómo estos grupos generan acciones de “justicia”.

A la luz de lo expuesto, se puede afirmar que las diferencias al interior de la coalición de gobierno son más profundas de lo que parecen. Por un lado, nos encontramos con una izquierda con un *ethos* asociado a una concepción de justicia anclada en la universalidad de derechos sociales. Por el otro, tenemos a la izquierda *woke*, buscando más derechos para ciertos grupos, profundizando las desigualdades. Un ejemplo reciente es la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza, donde se manifestó en su máxima expresión el concepto *woke* al proponer que las fuerzas de orden y seguridad debían actuar de acuerdo a una diferenciación extrema de los grupos a disuadir.

⁶ Ídem.